

Las elites urbanas y el destino de Cochabamba

José M. Gordillo¹ - Alberto Rivera²

Quién o quiénes mandan hoy en Cochabamba? ¿En qué ámbitos públicos o privados se planifica su destino? ¿Cómo se construye su futuro regional? Las antiguas elites que basaban su poder en el monopolio de la propiedad territorial y lo ejercían a través de las redes familiares por las que ese poder circulaba, fueron desmanteladas por la revolución de 1952. Las políticas neoliberales de 1985, lejos de reconstituir el poder de esas antiguas elites regionales, les dieron su puntillazo final puesto que impulsaron la emergencia de grupos sociales que ahora controlan sectores claves de la economía urbana y tienen una gran capacidad de presión política, pero que no han podido aún conformarse como elites de poder. Por lo tanto, el poder esta fraccionado y encapsulado en ámbitos de la administración pública donde nuevas elites burocráticas se reproducen, pero sin haber tampoco logrado hasta ahora tejer redes institucionales por las que su poder circule y les permita proyectarse como referentes del destino regional. En estas circunstancias históricas, quizá la única alternativa que queda para crear un proyecto regional sea la construcción de una red de instituciones públicas y privadas que piense, elabore propuestas

y asuma el liderazgo regional diseñando una mística que de sustento a una nueva identidad cochabambina.

Antecedentes

Las reflexiones y propuestas que se formulan en este artículo tuvieron su origen en las conclusiones de una investigación sobre las elites de poder en Cochabamba publicada bajo el título de *¿Pitaq kaypi kamachiq? Las estructuras de poder en Cochabamba, 1940-2006*. La Paz: PIEB, 2007, elaborada por José M. Gordillo, Alberto Rivera y Ana Sulcata. Aunque en dicho trabajo los autores dieron una mirada regional al poder, ahora nosotros nos concentraremos en el rol de las elites del municipio de Cochabamba y reflexionaremos sobre sus características y sus limitaciones a la hora de desempeñar el liderazgo regional, para concluir el trabajo proponiendo una posible solución a la crisis de identidad por la que atraviesa la región.

Partamos mencionando la predilección que gran parte de los investigadores y analistas sociales bolivianos han demostrado sobre el estudio de las clases subalternas en el país, descuidando así a los grupos dominantes. Es probable que esta

- 1 Economista e historiador. Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales (2008) y catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS (1997). Miembro del directorio del CERES (2005).
- 2 Sociólogo, especialista de temáticas urbanas. Fue director del Centro de Investigaciones de Sociología (CISO) durante el período 2001-2007.



tendencia provenga de la tradición fuertemente nacionalista, populista e indigenista de la revolución de 1952, razón por la cual los intelectuales bolivianos contemporáneos se embelesaron con el análisis de la emergencia y del rol político de las organizaciones obreras, campesinas y de clase media hasta la década de 1980, para luego concentrarse en el tema indígena que está vigente en nuestros días.

Pocos estudios empíricos se han planteado últimamente el tema de quienes mandan en Bolivia, cuestión que nos deriva inmediatamente al tema complementario de quienes los obedecen y bajo qué régimen de subordinación o dominio se entablan esas relaciones de poder. Es por esta falencia, quizá, que todavía comprendemos muy poco de los agentes y de los mecanismos de dominación en el país y que nuestras respuestas relativamente intuitivas a estas incógnitas se escudan en los fantasmas de las viejas oligarquías que solían implantar su férula sobre el pueblo subyugado.

De hecho uno de los motivos que impulsaron esa investigación fue nuestra perplejidad ante los conflictos regionales que se produjeron desde principios de los años 2000 en Cochabamba, que algunos explicaban por una aparente confrontación de intereses de los sectores sociales emergentes producto de la aplicación de la Nueva Política Económica de 1985 con los intereses de las oligarquías regionales. Esas supuestas oligarquías, nos preguntábamos, ¿Serán los resabios de aquellos clanes familiares que monopolizaban la tierra antes de 1952? ¿O serán, más bien, algunas ramas de sus descendientes que han logrado reproducir sus redes de poder y continúan dominando la economía y la sociedad de Cochabamba? ¿Es que el régimen neoliberal implantado en 1985 fortaleció el poder de esas antiguas fami-

lias terratenientes y son ahora sus nietos los que lo disfrutan? ¿Las pugnas regionales de poder reflejan una confrontación entre esas antiguas oligarquías con los sectores sociales emergentes? ¿Serán esos sectores emergentes los nuevos grupos sociales que escalan en las estructuras de poder? En resumen, ¿Quién manda hoy en Cochabamba?

Fueron precisamente este tipo de preguntas complejas las que nos condujeron a indagar sobre el origen, la naturaleza y la dinámica del poder regional, de tal manera que para responderlas tuvimos que tratar el problema del mando social y su ejercicio por las elites de poder. Ahora bien, aunque es evidente que en la práctica el ejercicio del poder suele concentrarse espacialmente en los centros urbanos y que ese es el caso también de Cochabamba, ello no significa que el carácter del dominio que estos grupos de poder urbanos ejercen sea necesariamente de la misma naturaleza. Por tanto, nuestro tema central de análisis en este artículo será el carácter del mando que ejercen las elites de poder urbano en el municipio de Cochabamba considerando que (de acuerdo a los resultados de la investigación regional) la agricultura no produce gran riqueza en la región ni de ella se derivan grupos sociales compactos, que la economía urbana no tiene una base industrial sino de servicios, de comercio y de transporte, y que el poder de las elites urbanas se encuentra muy fragmentado.

Sobre la base de estas reflexiones acerca del poder de las elites urbanas, en la parte final del artículo hacemos una propuesta para reconfigurar el liderazgo regional mediante la construcción de una red institucional por la que circule el poder y el conocimiento, logrando crear ámbitos de discusión y elaboración de proyectos regionales que permitan diseñar

una nueva identidad para la región. Si el poder está fragmentado y las nuevas elites burocráticas se han ubicado en las principales instituciones públicas que tienen su centro de actividades en el municipio de Cochabamba, estos grupos podrían reciclar sus conocimientos plasmándolo en un proyecto regional común que redefina el destino de Cochabamba.

Historia, etnografía y sociología de las elites urbanas

Las elites de poder en Cochabamba basaron históricamente su hegemonía en el control de los recursos naturales y en el monopolio del conocimiento. Hasta la revolución de 1952, la propiedad territorial era el instrumento de dominio económico y de poder simbólico que les permitía situarse en la cúspide de una estructura vertical de poder, desde donde ejercían el mando sobre una base social ancha y subordinada.

Esta relación vertical de poder entre quienes mandaban y quienes obedecían, entre los poderosos y los desposeídos, estaba impregnada por prejuicios étnicos heredados del modelo de control social construido durante el período colonial y que, en síntesis, colocaba a los blancos o descendientes de los españoles en la cima y a los indios o descendientes de la población nativa en la base. Como resultado de un proceso histórico de larga data, durante el período republicano se afianzó un sector mestizo de la población que se colocaba al medio en la escala de poder, pero era este un sector mestizo amparado más en los intercambios culturales de sus miembros que en las interrelaciones biológicas entre los descendientes de españoles y nativos. Es decir, a lo largo del tiempo, se había producido un mestizaje más de orden cultural que biológico.

Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se implantó en Bolivia un modelo económico basado en los principios del liberalismo o del libre mercado, que propugnaba la inserción del país en las redes del mercado mundial. Pero, este vínculo entre Bolivia y el mundo capitalista se basaba en la exportación de los minerales más rentables que fueron la plata y el estaño, cuyos yacimientos se ubicaban en el altiplano occidental del país. Los centros del poder político y económico por entonces fueron Sucre y La Paz, en tanto que las regiones centrales y orientales del país quedaron en calidad de áreas marginales al modelo de desarrollo liberal. Cochabamba y Santa Cruz, por ejemplo, regiones cuya economía se basaba en la agricultura y cuyos productos se destinaban a los mercados internos, fueron apartadas del proceso de modernidad que se implantaba en el país junto a una economía mono exportadora de minerales e importadora de productos industriales. Esta marginación de los productos y de los mercados regionales causó un fuerte impacto en las elites de poder regional, porque impuso límites demasiado estrechos a su capacidad de reproducción económica y social. La otrora poderosa clase terrateniente de los valles interandinos se fragmentó y se debilitó, abriendo espacios a la competencia de sectores y economías campesinas que, primero, les disputaron los mercados y, luego, el poder político junto al prestigio social.

La crisis del capitalismo mundial de la década de 1930 y la Guerra del Chaco (1932-35) ocasionaron una readecuación de la estructura del poder nacional. El liberalismo fue interpelado por corrientes nacionalistas que plantearon un proyecto de nación proteccionista en lo económico e incluyente en lo social, asignando al Estado un rol mucho más activo en el



proceso de desarrollo socioeconómico. Estas nuevas corrientes de pensamiento se cristalizaron y se hicieron factibles a través de la Revolución Nacional de 1952, que le permitió al MNR asumir el mando de la nación. En este contexto histórico y político, las elites regionales no pudieron adecuarse a las rápidas transformaciones que exigía el mundo moderno y fueron cediendo sus espacios de poder. Ante la declinación del valor de sus productos agrarios, las elites terratenientes no lograron formar una nueva generación que se involucra en el comercio y la industria como actividades alternativas. Cuanto más, acapararon una parte del sector financiero bancario, pero no se involucraron directamente en la organización del comercio ni de la industria, sectores económicos que más bien empezaron a ser comandados por sucesivas generaciones de inmigrantes nacionales y extranjeros. En justicia, podríamos aceptar que las condiciones económicas no eran las más propicias para el desarrollo de una burguesía en la región, pero, en contraparte, debemos resaltar la rigidez mental de los terratenientes y de una parte de sus generaciones de recambio. La otra parte de sus hijos resultó ser contestataria, puesto que, apoyados en ideologías marxistas, nacionalistas e indigenistas, se estrellaron contra los intereses de su propia clase, movilizándolo a los campesinos y a las clases medias urbanas mediante partidos políticos izquierdistas y nacionalistas, como el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y, en una etapa histórica posterior, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El régimen revolucionario del MNR propició la organización sindical y la controló desde sus mandos partidarios centrales. En Cochabamba, los sindicatos campe-

sinos adquirieron un gran poder político y fueron el sustento del régimen, lo que significó, a cambio, que se diera luz verde a la toma de las tierras de las haciendas y a su fraccionamiento directo entre los miembros del sindicato. Se desarraigó a la elite propietaria y se dio lugar al nacimiento de una sociedad de campesinos parcelarios clientes del régimen, los propietarios expulsados fueron prohibidos de ingresar al campo y las inversiones privadas fueron anuladas. Pero, así como se dismanteló a la elite terrateniente, el régimen del MNR no creó las condiciones ni económicas ni sociales para que esa elite fuera reemplazada con otro grupo de poder que proyectara el futuro regional. La tímida e incipiente burguesía local fue aplastada con las medidas económicas revolucionarias y acabó por dismantelarse también como el poder de los antiguos terratenientes. El poder regional se fragmentó y los liderazgos locales casi desaparecieron. Cochabamba se quedó sin rumbo.

El proceso histórico-sociológico que acabamos de describir fue ilustrado en este estudio con el uso de herramientas etnográficas, que nos permitieron ingresar al seno de aquellas familias que conformaron esos grupos de poder tradicional de la región. Las familias de quienes poseían tierra y acciones, de los que producían conocimiento y de aquellos que aportaron con los cuadros de dirigentes sindicales en esa etapa histórica, fueron, en primer lugar, identificadas y, posteriormente, estudiadas. De ahí es que vimos cómo la elite terrateniente estaba fraccionada, primero, en función a la ubicación de sus propiedades (las familias con mayor poder tenían sus tierra cerca a la ciudad de Cochabamba) y, segundo, en relación con el capital simbólico que manejaban (prestigio social y participación en los clubes y en la cámaras).

Pero, aun las familias de mayor poder tampoco conformaban un bloque común de interés; estaban, a su vez, fraccionadas en clanes familiares que muchas veces eran competitivos en sus negocios y, sobre todo, en la representación social. Unos clanes familiares reivindicaban su descendencia de troncos comunes de origen colonial, mientras otros lo hacían de troncos republicanos. Unos y otros se relacionaron con el capital financiero, pero casi ninguna de sus familias se involucró directamente en el manejo de empresas comerciales, industriales o de servicios. Estas actividades mercantiles e industriales fueron llevadas a cabo sobre todo por familias de inmigrantes extranjeros, que llegaron a Cochabamba desde fines del siglo XIX (especialmente, los alemanes) y durante la primera mitad del XX (los italianos, eslavos, judíos y árabes). La organización de empresas, como la cervecería Taquiña y de transporte aéreo como el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), fueron iniciativas emblemáticas de una mentalidad empresarial que fue introducida por estas familias de inmigrantes. En otros rubros industriales, como los de los alimentos, el vestido, los cueros, la molinería, la hotelería y los lácteos, los recién llegados no sólo aportaron con su experiencia tecnológica, sino que impulsaron al cambio de los hábitos de consumo de una población regional hasta entonces encerrada en sus costumbres.

Pero, del seno de las familias terratenientes surgieron también, así sea tímidamente, las iniciativas de cambio hacia actitudes y prácticas empresariales modernas.

La creación de empresas de servicios como Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), que instaló también los primeros tranvías de servicio urbano y rural, la empresa de telefonía local y otras más fueron

posibles gracias al esfuerzo de pioneros cochabambinos que lucharon por introducir la modernidad en ambientes que, por entonces, eran reacios al cambio. De estas familias surgieron también los intelectuales y políticos que aportaron con su pensamiento literario, periodístico y político a la transformación de las ideas de la población local y el alcance de sus obras y proyectos repercutió en el nivel nacional; tanto es así que los teóricos más importantes del PIR, del MNR y de Falange Socialista Boliviana (FSB) fueron pensadores cochabambinos.

Estos visionarios se estrellaron, en muchos casos, contra los intereses de su propia clase social, porque desconfiaban de la capacidad histórica y financiera de las familias de los terratenientes para impulsar el cambio social y económico en la región. Es por eso que apostaron al Estado como al agente de promoción del cambio y sus ideas se acercaron más al centralismo estatal que a la gestión regional. Cuando la reforma agraria desmanteló el régimen de las haciendas y entregó la tierra a los campesinos, pero sin proyectarlos como clase y cuando las políticas de desarrollo del MNR marginaron a la naciente industria local, el efecto inmediato fue la emigración de una gran parte de los intelectuales, industriales y trabajadores mejor calificados de la región.

La magnitud de este último fenómeno se aprecia mejor cuando se analizan los cambios en el nivel de educación y en la residencia de los miembros de las familias de las elites en el transcurso de tres generaciones: la generación de la revolución, la de sus hijos y la de sus nietos. Las familias de la elite económica profesionalizaron intensivamente a sus hijos, pero la mitad de ellos emigró de la región y muchos se fueron al exterior. Las familias de la elite intelectual también educaron a sus



retoños al más alto nivel, pero sólo una quinta parte de ellos emigró de la región. Finalmente, las familias de la elite sindical elevaron también el nivel educativo de sus descendientes, pero sólo hasta niveles técnicos y sus conductas migratorias son de ida y vuelta en función a los vaivenes del mercado laboral. Concluimos, entonces, que las familias de la elite económica se han dispersado y ya no ejercen poder en la región. En cambio, las familias de la elite intelectual se han reacomodado y ejercen poder en forma fragmentada en los ámbitos de la empresa privada y de las instituciones públicas. La elite sindical, por último, se ha atomizado y no ejerce poder alguno en la región, salvo algunas esporádicas apariciones coyunturales liderando grupos de presión al interior de los movimientos sociales.

De todo ello nos queda una experiencia: el poder que se practica a lo largo del tiempo debe estar sustentado por redes a través de las cuales este poder fluya y se regenere constantemente. El poder individual así como el liderazgo coyuntural son efímeros e insustanciales. En nuestro caso, hemos comprobado cómo las familias y sus redes de influencia constituyeron en Cochabamba los circuitos primarios de poder y de prestigio social; estos circuitos fueron desmantelados o, más aún, destruidos durante el proceso revolucionario. Sin embargo, lo verdaderamente difícil es lograr ahora reconstruir las nuevas redes de poder una vez que algunos sectores sociales emergentes han desplazado el poder de las antiguas familias dominantes, familias estas que en la práctica han desaparecido o se han diluido en la sociedad regional contemporánea.

Cuando iniciamos esta investigación, estábamos muy influidos por los mensajes de la prensa en general, que mostraban los escenarios de las luchas políticas

en las calles y carreteras del departamento y, especialmente, en la plaza principal de esta ciudad. Esos discursos señalaban algunas evidencias para creer que el poder estaba en el pueblo movilizad en las calles y que esta figura era completamente diferente a las formas en que se ejercían los poderes antes de 1952. Impresionados por estos mensajes, nos dedicamos a estudiar a los dirigentes de las comerciantes, los transportistas y los regantes considerándolos como elites emergentes con gran poder de presión y presencia en los acontecimientos políticos de Cochabamba.

Encontramos que estas elites emergentes habían superado los niveles educativos de sus padres logrando obtener títulos profesionales en muy pocos casos y, sobre todo, mucha práctica en las estructuras sindicales, que les sirven como medios de aprendizaje en el campo social y político. Estos dirigentes no alcanzaron niveles profesionales suficientes para controlar el conocimiento, como lo hicieron los descendientes de los terratenientes, pero, pese a ello, se mantienen como líderes de sus propios gremios sin ideas claras sobre el destino de Cochabamba ni sobre las posibilidades reales de sacarla de su histórico atraso. El cambio notable es que sus hijos, la tercera generación estudiada, lograron ciertos niveles de profesionalización, pero con una fuerte tendencia emigratoria. Determinamos también que estas elites emergentes no actúan como clases sociales en formación, es decir, no hallamos indicios de comportamientos corporativos formadores de redes de reciprocidad y apoyo en grandes proyectos, menos como portadores de ideologías claras sobre el futuro deseable para los cochabambinos o, por lo menos, imaginarios posibles. Su fuerza estaba en las coyunturas de presión, pero como gremios permanecen alejados de los centros donde se discuten los proyectos

regionales, no se vinculan con los empresarios, con los medios de comunicación ni con los centros universitarios, a pesar de haber establecido vínculos con la alcaldía y la prefectura mediante los mecanismos convencionales de la cooptación política. Poco a poco, entonces, visualizamos que si la economía de las provincias estaba estancada y bloqueada por sus organizaciones sindicales, no quedaba otro espacio más que el municipio extendido hacia otras provincias para poder hacer economía y para crear riqueza en Cochabamba. A ese fenómeno espacial conurbano que adquiere forma en los márgenes de las carreteras que vinculan al municipio de Cochabamba con los departamentos de oriente y occidente, lo denominamos urbanización lineal.

Percibimos que había cambiado la forma de la estructura social del departamento, que la pirámide clásica del poder de la década de los años de 1950 ya no correspondía a la compleja realidad actual de la región y que, por tanto, la forma de la estructura social cochabambina ahora parece más bien un rectángulo achataado en cuyo nivel superior permanecen algunos de los herederos de las elites de privilegio y de los intelectuales del siglo XX. A ellos se añaden los empresarios de constructoras y consultoras que se insertan en las principales instituciones públicas como la prefectura y la alcaldía y que coexisten con elites de gremios emergentes como las comerciantes, transportistas y, en menor medida e importancia, los regantes. Ante la ausencia de una clase dominante y de elites conductoras de los procesos laborales, el dominio social y político en Cochabamba se anidó en las instituciones formales agrupadas en el comité cívico, pero éstas tampoco lograron actuar en forma corporativa ni perfilaron una ideología común de consenso; por

el contrario, se mantienen en una pugna constante que empobrece nuestro futuro, dado que la evidencia empírica nos demuestra que las instituciones cívicas no pudieron crear en más de medio siglo las condiciones económicas y políticas que les permitan reemplazar el dominio de la clase social desarraigada en 1952, y ello a pesar de que sus instituciones están a su vez involucradas en todos los procesos económicos, políticos y culturales del municipio.

Si estas elites emergentes no ejercen el poder porque no establecen redes de influencia ni se nota su presencia en los grandes proyectos departamentales, entonces, ¿quiénes mandan realmente en Cochabamba? No pudimos estudiar a las elites culturales actuales, a los empresarios, a las iglesias y a los medios de comunicación y nos parecían muy lejanos los dirigentes de las seis federaciones del trópico a pesar de su peso político. Pero, si las provincias están estancadas, si los poderes están fragmentados en múltiples elites, si sólo queda el área urbana para crear riqueza ya que el sindicalismo campesino bloquea las inversiones en las provincias, concluimos que para poder acumular en Cochabamba no existe otra posibilidad más que buscar refugio en las instituciones que manejan fondos estatales. Si el poder no reside en la fuerza del pueblo movilizadado en las calles, encontramos que se ejerce desde las instituciones que controlan fondos del Estado como la prefectura, la alcaldía y la Universidad Pública, entre otras. ¿Cómo se mueve ese dinero de inversión y gasto? Nuestros informantes nos condujeron por un espinoso camino de investigación sobre las licitaciones, las adjudicaciones de obras y los contratos con consultoras y constructoras. Despejando estos temas, detectamos que existen grupos de interés al interior de



estas instituciones, a las que denominamos elite burocrática por su capacidad de moverse entre la pesada maquinaria de gestión, formadas por profesionales y técnicos que desde hace décadas han adquirido experiencia en la gestión de fondos estatales y en la obtención de beneficios privados.

Encontramos que las estructuras de poder están formadas por nuevas elites burocráticas íntimamente vinculadas con las elites políticas y decidimos graficarlas como campanas de poder, como una alegoría que permite explicar gráficamente tales estructuras. Al interior de las campanas, ubicamos a la elite burocrática y las elites políticas y fuera de ellas, colocamos a los movimientos sociales, los medios de comunicación y a las elites emergentes. Los sucesos de enero del 2007, por ejemplo, mostraron cómo la fuerza de los sectores movilizados en las calles chocó con las campanas de poder, las estremeció, pero finalmente no alteró la base de su poder que es el control de los fondos estatales.

La economía de nuestro departamento es débil, sus indicadores están muy lejos de los logros alcanzados por Santa Cruz y La Paz y esto se debe a que las estructuras de organización social y política de Cochabamba bloquean las posibilidades de progreso colectivo. No existe la posibilidad de que se lleguen a acuerdos interinstitucionales con metas que busquen el bien común; cada institución gremial, profesional, de gestión estatal o agrupación política vela por sus intereses particulares y descuida la visión amplia, la perspectiva departamental y sus potencialidades. Los temas centrales no se discuten y las metas y fines de las principales instituciones son meramente discursivas, por ello es que no hay visión de futuro en la región, ni identidad colectiva que tien-

da a superar la pobreza, ni las distancias sociales, económicas y culturales de su población. Cochabamba es una sociedad difícil porque la nueva composición de su estructura social presenta una diversidad de elites como grupos de interés incapaces de articular una meta común de beneficio colectivo; se generan órdenes que no se cumplen porque la sociedad emergente y sus líderes no las acatan, porque desconocen el sentido de los comportamientos colectivos con base en reglas claras sujetas al cumplimiento de normas y sometidas a la posible sanción o castigo.

En definitiva, encontramos un agro que no crea riqueza, una ciudad dominada por múltiples grupos de intereses locales y, lo que es más grave, notamos la ausencia de elites conductoras, organizadoras y planificadoras de los procesos de trabajo.

Todo lo anterior trae como consecuencia una sociedad a la deriva, sujeta a las improvisaciones, a los vaivenes políticos y al disfrute de la desobediencia civil.

Naturaleza y carácter del poder de las elites urbanas actuales

En una región en la que la agricultura tradicional no genera una parte importante de la riqueza social (no hemos estudiado el caso de la producción de la coca y sus derivados que, sin duda, será necesario tomar en cuenta para comprender mejor el tema del poder en Cochabamba) y donde la población se concentra en la ciudad capital cuya economía no es precisamente de carácter industrial, vemos que existen pocas actividades urbanas que sustenten a sus grupos de poder. Una de esas actividades es la que gira alrededor de la especulación de la renta de la tierra urbana y del negocio inmobiliario, porque en ese mercado intervienen por las vías tanto de

la oferta como de la demanda, dos poderosos actores colectivos e institucionales que tienen en sus manos los instrumentos que les permiten ejercer presión sobre las tasas de ganancia. Estos actores son las empresas inmobiliarias en la parte visible y los loteadores ilegales en el ámbito mas cerrado, por otro lado está la Alcaldía Municipal, como un actor principal que define en sus relaciones de poder qué tierras se van insertando al mercado legal y son sujetos de inversión pública, regulando de esta manera su renta.

Por una parte están, los que controlan los flujos monetarios que hacen presión a la demanda efectiva (remesas del exterior, economía de la coca-cocaína y del contrabando) y, por otra, los que regulan la oferta también efectiva de tierra urbanizable y de viviendas construidas. Como la oferta física de la tierra en el área urbana es inelástica, los que tienen un gran poder económico no son tanto los propietarios de las parcelas, sino más bien aquellos que tienen la capacidad de añadirlas al mercado legal de tierras urbanas. En otras palabras, la mercancía preciada no es la tierra física sino aquella urbanizable y ese poder de decisión está en manos de aquellos municipios altamente urbanos como es el caso del Cercado en Cochabamba, donde la circulación de la tierra y de los bienes inmuebles crean capital especulativo pero sustituyendo la riqueza que tendría que ser generada por actividades productivas como la agricultura o la industria. Esta situación, sin duda, crea efectos económicos y sociales contra-productivos, ya que la economía del municipio se vuelve inviable para los sectores populares y para las nuevas generaciones urbanas.

En otro nivel institucional se encuentra la prefectura departamental cuyo presupuesto es el mayor de todas las instituciones cochabambinas y tiene bajo su tuición

a la totalidad de las provincias y de municipios, concentrando entonces un enorme poder económico y político en la región. Así mismo, y también en diferente nivel institucional, está el caso de la Universidad Mayor de San Simón, que tiene acumulado un gran capital simbólico y cultural junto a un importante presupuesto público, puesto que es un ámbito de reproducción del conocimiento en la región.

Con el ejemplo de estas tres instituciones públicas deseamos introducir el concepto de “elites burocráticas” para discutir el caso de las elites urbanas en Cochabamba. Digamos en principio que entendemos por elite burocrática a los profesionales e individuos que trabajan en las instituciones estatales gestionando el desarrollo de los planes y proyectos de inversión generados por las elites políticas durante su paso por la administración pública. Esta elite dependiente ha permanecido años en el control de los puestos clave de la administración de las instituciones públicas.

Su función no es meramente técnica al servicio de la sociedad como funcionarios públicos, ya que son dependientes de las orientaciones e intereses coyunturales de las elites políticas. Actúan como núcleos cerrados e impermeables que basan su poder de influencia en el manejo del conocimiento técnico y en la capacidad burocrática de gestión de los pesados y complejos mecanismos institucionales con base en el secreto administrativo de los procedimientos de creación de los proyectos de inversión, licitación y adjudicación de obras y estudios a consultoras y empresas constructoras. Su vínculo con las elites económicas es directo y funcional a los intereses del entorno de los líderes políticos para generar utilidades de beneficio grupal o personal sobre los recursos estatales. No aparecen públicamente como elites ni



tienen interés en proyectarse socialmente como conductores de procesos de cambio o desarrollo regional.

Ahora bien, estas elites burocráticas no solo son funcionales a los intereses de las elites económicas y políticas, sino que su poder debe estar institucionalizado y además debe manifestarse como expresión de una estructura de poder que tenga una mayor o menor duración temporal. Ello porque los grupos dirigentes no ejercen el poder ni en el vacío ni desde la nada, sino que se amparan en las organizaciones mediante las que el Estado y la sociedad se articulan. En otras palabras, utilizando esta visión podemos conectar el concepto de elite al de estructura.

Los miembros de estas nuevas elites se apegan al poder de las instituciones estatales como la prefectura, la alcaldía, la universidad y otras instituciones públicas, gracias a su nivel profesional, al manejo del conocimiento técnico, a las destrezas burocráticas y a su capacidad para mimetizarse políticamente con los partidos y agrupaciones ciudadanas en cada período electoral, formando tribus o logias que actúan como grupos que protegen sus intereses. La capacidad de esta elite para readecuarse en posiciones claves de la estructura social del departamento es socialmente aprovechada para que sus miembros se mantengan en posiciones de poder e influencia en la principal institución del departamento y sean inmunes a todo embate de los movimientos sociales, que en el caso de la revuelta del 11 de enero de 2007, por ejemplo, intentaron lograr infructuosamente la sustitución del prefecto y de sus equipos técnicos.

De esta manera, se conforman unos ámbitos institucionales más o menos cerrados donde se reproducen estos grupos de interés, que en el estudio los hemos comprendido como un sistema interco-

nectado de “campanas de poder”, cada una de ellas con su propio aparato burocrático, mediante los cuales se maneja el conocimiento administrativo y técnico para distribuir los recursos estatales entre las elites económicas y políticas.

Este tipo de estructuras de poder urbano como se da en el caso de Cochabamba, donde se constituyen redes de interés al interior de la sociedad civil compuestas por individuos institucionalizados que actúan como elites políticas, económicas, sociales y culturales y que desarrollan actividades vinculadas con el financiamiento estatal a las diferentes instituciones públicas, podrían quizá funcionar eficientemente desde la perspectiva del desarrollo social siempre y cuando las instituciones y sus grupos de interés acordaran y de hecho practicaran una serie de objetivos comunes. Los problemas surgen cuando estos diferentes grupos de poder institucional no solo que se desconectan en sus objetivos, sino que se enfrentan en sus intereses políticos y económicos.

Una lectura de los acontecimientos en Cochabamba en los últimos años muestra el resultado de la dispersión y desconexión de elites y esto se hizo muy evidente especialmente en las ya superadas pugnas personales entre el anterior prefecto y el actual alcalde de Cercado. Estas pugnas separaron a ambas instituciones y bloquearon la posibilidad de ejecutar proyectos comunes. Esta oposición entre líderes de las dos fuentes de poder más importantes, que buscaban el desprestigio personal y deslucir los procesos de gestión del adversario, contagió a los funcionarios de nivel técnico y se cerraron las oportunidades de cooperación institucional. En realidad quien perdió en estos conflictos fue el municipio de Cochabamba, porque no se resolvieron los problemas más acuciantes como son, por ejemplo, los 73 asen-

tamientos sobre la cota 2750, el manejo de la cuenca Mailanco - Rocha - Parotani, los asentamientos en el distrito 9 y otros.

¿Qué resultado se puede esperar cuando las elites burocráticas están empuñadas en la pugna por intereses grupales? Un efecto directo de este problema se manifiesta, por ejemplo, en la presente crisis municipal y en las actitudes de los miembros del Consejo Municipal de Cochabamba, quienes debaten públicamente sus conflictos personales descuidando totalmente los temas de interés colectivo. Así se patentiza el grado de desorden social motivado por el mal uso de los pequeños poderes que detentan las elites burocráticas. Una penosa tradición histórica de las sociedades sin rumbo es su gran capacidad de autodestrucción a través de la desestabilización institucional y lo prueba el hecho de que en la última década tuvimos 18 prefectos y 21 alcaldes, algunos que sólo duraron dos meses en el cargo. La acentuada desconfianza al interior de las colectividades urbanas y de las elites actúa negativamente en la vida política del municipio. No se conoce en los últimos años que algún plan de desarrollo prefectural o municipal hubiera sido aceptado por consenso.

Fuera de las instituciones y quizá como un reflejo de ellas, la vida cotidiana se desenvuelve en un marco poco democrático y muy conflictivo por las diferencias en el acceso a servicios básicos que separa a las colectividades del norte y del sur y son ya muy visibles los fenómenos de ocupación de espacios tradicionales por población proveniente de la zona sur que desplazan étnicamente a sus residentes habituales. En contrapartida, ciertos espacios en el sur del municipio no pueden ser visitados por la población residente en el norte por las diferencias étnicas y por otras características más económicas que sociales. Hay

un proceso de apropiación de los espacios urbanos con un sentido cultural que lejos de unir a los residentes urbanos más bien los separa y en ocasiones los enfrenta, como fue el caso del pasado 11 de enero del 2007.

La emigración permanente de ciudadanos que buscan mejores oportunidades laborales en el exterior se combina con la llegada de familias del altiplano que se localizan tanto en el área protegida del Parque Nacional Tunari (Distrito 13), como en el Distrito 9 considerado agrícola por una Ley nacional de 1983. Este reemplazo poblacional trae aparejado un conjunto de fenómenos culturales que toman forma y se arraigan en los asentamientos y barrios recientemente conformados que pretenden ser regularizados por la alcaldía y muchas veces las expresiones culturales no son valoradas precisamente por sus expresiones artísticas, sino que provocan rechazo colectivo por las manifestaciones de violencia como los linchamientos que han proliferado en Cochabamba.

En este panorama de conflictividad espacial, dispersión social y de crisis institucional, cada vez se hacen más lejanas las posibilidades de contar con ejercicios de planificación basados en la concertación con vecinos y campesinos, para que así se puedan asumir compromisos y responsabilidades que protejan su entorno y garanticen una mejor vida para las generaciones venideras.

El desafío consiste en encontrar los caminos posibles para superar este estado de cosas, ya que probablemente estas rutas no sean viables desde el campo político en vista de su conflictividad, sino desde otro tipo de proyectos más incluyentes que provengan ya sea de los ámbitos de la cultura o de la protección del medio ambiente. Probablemente, en este estado de cosas, lo único que podría unir a los residentes



en esta ciudad sea la formulación de algunos paradigmas coherentes para iniciar un proceso de cambio basado en la construcción de alianzas, coaliciones amplias que permitan la creación de un marco de correlación de intereses comunes, que permitan la aplicación de políticas de integración social factibles en el mediano plazo.

Hacia un liderazgo institucional

Propugnamos un nuevo paradigma centrado alrededor de la idea de un municipio que combine su histórico atributo mercantil con el adecuado manejo del conocimiento tecnológico y científico en beneficio de los residentes y del territorio. No es casual que existan 13 universidades en Cochabamba, una pública y las restantes privadas, en San Simón estudian cerca de 60.000 personas y aproximadamente 30.000 en las privadas, formando el mayor conglomerado poblacional del municipio con efectos territoriales fácilmente perceptibles en las calles próximas. Es innumerable la cantidad de tesis de licenciatura e investigaciones que se archivan en las facultades sin darles un uso adecuado, si esto ocurriera se podría impulsar la imagen de una moderna sociedad del conocimiento.

Esta idea de una sociedad del conocimiento implica aplicar el conocimiento sofisticado al desarrollo de ciertos sectores estratégicos, como ser los de educación, salud, vivienda, industria, comercio y agricultura. Ese conocimiento sofisticado no es estrictamente académico, sino también empresarial, profesional (de tipo médico, industrial, informático, agrario, petrolero), pero de alto nivel. Aquí es donde pueden vincularse las investigaciones doctorales en los campos de economía, ingeniería, arquitectura, con los equipos de planificación municipal y prefectural.

La economía urbana es el motor del desarrollo regional, por tanto se debe repensar el carácter del municipio. En lugar de varios centros urbanos dispersos en los valles, pensar en potenciar la franja conurbana o metropolitana proyectándola al próximo siglo como una gran metrópoli con una red de caminos y vías férreas fundamentales que unan los valles Alto, Bajo, Central y de Sacaba para que se favorezcan del permanente tránsito de bienes entre el Atlántico y el Pacífico. Actualmente, el área metropolitana es un lugar de paso, pero saca pocas ventajas de esa condición geográfica que podría ser mejor explotada.

En este gran municipio conurbano será preciso zonificar las áreas de vivienda que estén vinculadas a las actividades educativas, hospitalarias, industriales, comerciales y agropecuarias. De hecho, ya está en progreso la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía y la sede del Parlamento Sudamericano, para aprovechar la ubicación geográfica central de Cochabamba en el continente.

En esas zonas económicas se pueden aplicar incentivos de distinta naturaleza para apoyar el asentamiento de actividades productivas mediante sistemas que impulsen la inversión de capitales privados de distinta magnitud. En este aspecto se deben diseñar los modelos que atraigan esos recursos financieros hacia las áreas de producción y de servicios priorizados. Como centro regional los mercados serán nacionales e internacionales (por ejemplo, el proyecto de una universidad aeronáutica que vincule a la UMSS con el LAB, y que pueda ofrecer servicios a toda América Latina).

Aquí se vinculan las actividades de educación y formación superiores con aquellas empresariales específicas de alto rendimiento (aeronáutica, comunicación,

energía, agricultura). Las empresas locales deben diseñar alianzas estratégicas entre ellas para crear ámbitos de reproducción de valor aprovechando los capitales internos y externos, apoyadas por políticas específicas a nivel municipal y prefectural.

El primer paso necesario es reconfigurar el liderazgo regional mediante la construcción de varias redes institucionales por las que circule el poder y el conocimiento, logrando crear ámbitos de discusión y elaboración de proyectos regionales que permitan diseñar una nueva identidad para la región. Con ello, se lograría la construcción de un imaginario colectivo consensuado de una sociedad de progreso y bienestar sustentada en sus atributos agrológicos, climáticos y humanos.

Por supuesto que la tarea de crear redes institucionales en una sociedad altamente fragmentada y atomizada en tribus cerradas es un desafío a largo plazo que debe superar todas las limitaciones culturales del acentuado individualismo que nos caracteriza y la escasa confianza en las iniciativas ajenas. Por ejemplo, la Dirección de Planeamiento de la alcaldía del Cercado ha iniciado un proceso de convocatoria a las principales instituciones asentadas en el municipio. En la primera convocatoria, sólo se presentaron 4 de las 13 universidades y en una segunda asistieron sólo 2 de las 7 cámaras de empresarios y pequeños artesanos. Para impulsar este proyecto se requiere investigar bajo que condiciones políticas las instituciones departamentales aceptarían participar y actuar corporativamente en beneficio de un futuro sostenible y estas condiciones tienen que ver fundamentalmente en el conocimiento de los valores y principios de las instituciones y en su capacidad para alterar o modificar los comportamientos colectivos impulsados en una nueva racionalidad ética colectiva que propugnamos.

Las dificultades parten desde la misma convocatoria a las instituciones locales. ¿Quién o quienes podrían convocarlas sin despertar susceptibilidades y críticas anteladas? Como es habitual, las actitudes subjetivas suelen chocar con las propuestas innovadoras, por eso es necesario partir reconociendo que es necesario tener el ánimo suficientemente equilibrado y una perseverancia sin límite para lograr que las convocatorias a los centros universitarios donde se forma la intelectualidad departamental, a las cámaras de empresarios de diferente nivel económico, a las asociaciones de comerciantes, de los transportistas, logren tender sólidos puentes de mejoramiento entre las instituciones y así se generen las condiciones de posibilidad y viabilidad de un verdadero proyecto colectivo regional.

Creemos que este campo de las motivaciones subjetivas de los representantes de las instituciones no tiene que ver necesariamente con las características psicológicas de los dirigentes institucionales, sino con las experiencias negativas que se dieron en la historia reciente que alteraron la estabilidad institucional tanto en la prefectura como en los Gobiernos Municipales (GM) del Cercado y de las provincias y en las relaciones de interés entre los diferentes grupos empresariales y la alcaldía, por ejemplo.

Nuestra reciente historia está plagada de ejemplos negativos en la articulación de intereses grupales con los intereses colectivos. Los ejemplos son múltiples como las divergencias surgidas entre los empresarios y el Concejo Municipal del Cercado por el caso FEICOBOL, como entre las cámaras que agrupan a artesanos y microempresarios que demandan permanentemente espacios en el municipio para desarrollar ferias que los benefician en su trabajo diario y no son suficientemente comprendidos por el GM.



Es necesario, entonces, plantearse el debate sobre el interés que podrían tener los empresarios para involucrarse en la construcción de redes de poder e influencia para generar proyectos colectivos. Las empresas privadas son unidades económicas organizadas financiera y jurídicamente para producir bienes o prestar servicios múltiples y especializados. Su móvil más fuerte es la obtención de lucro como un movimiento permanente en los diferentes mercados sobre los que actúa. Si las empresas son exitosas en los mercados regionales, nacionales e internacionales, ¿qué los motivaría a involucrarse en la toma de decisiones estratégicas para el futuro desde la planificación de los municipios mancomunados? Está claro que los agentes económicos asisten puntualmente a reuniones cuando tienen certeza de lograr algún beneficio, pero ¿con qué argumentos se los podría convocar y comprometer a discutir sobre el desarrollo regional? Quizá los empresarios no acaban aún de comprender claramente que en una coyuntura de cambios pueden suceder abruptamente situaciones que alteren su trabajo cotidiano, ya sea por excesos de los movimientos sociales que pugnen por profundizar los cambios o por la propia insensatez de las masas cuando actúan en medio del caos.

Conviene ser muy específicos al plantearles que no deben actuar como lo hicieron las elites territoriales en 1952, las que no tuvieron la capacidad de organizarse y prepararse a los inminentes cambios que se avecinaban. Al presente, la posibilidad de consolidar a largo plazo sus posiciones en los mercados, depende de sus decisiones para dejar de actuar como islas y concentrar la atención en que es una necesidad histórica agruparse para no perder el control de las futuras coyunturas.

El argumento anterior es válido para todos los agentes económicos sin impor-

tar su tamaño, las comerciantes de ferias y los transportistas deben saber que deben actuar inteligentemente en los procesos de cambios estructurales, antes de ser víctimas de procesos estructurales que se manifiestan con el ascenso político de los movimientos sociales, y el departamento de Cochabamba es uno de los más vulnerables justamente por la ausencia de liderazgo y un norte regional definido.

Por ello, mirando el contexto nacional, concebimos nuestras ciudades intermedias y áreas rurales como escenarios políticos que agrupan a innumerables grupos de interés y presión que propugnan el logro de reivindicaciones gremiales, por ello, la planificación municipal y la perspectiva histórica de proyectos de la envergadura que proponemos, no puede dejar de considerar los efectos negativos del cúmulo de rivalidades acumuladas en la historia reciente, ambiciones, temores, desconfianzas, simpatías y antipatías que no logran otra cosa que el cierre de las diferentes elites en los núcleos y tribus existentes como una forma de defensa en base a la auto exclusión en el seno de sus propias familias, con esto se pierden las oportunidades de crear nuevos líderes regionales.

La ausencia de un imaginario colectivo de progreso trae como consecuencia que las costumbres de comportamiento excesivamente crítico, que obstaculiza toda iniciativa por desconfianza y desinterés por el destino de Cochabamba, se perpetúen y nos agobien como un destino fatal. Es preciso que los responsables de las instituciones logren una conciencia clara y sería de que es históricamente necesario el dejar las viejas prácticas y asumir un compromiso con el municipio que los cobija. El mantener los impulsos emocionales de las instituciones que afectan la posibilidad de lograr estabilidad en las relaciones

interinstitucionales, no produce nada positivo y efectivo, por el contrario, bloquea las posibilidades de construcción de redes institucionales de poder e influencia para planificar el beneficio colectivo en el futuro inmediato.

La convocatoria al concurso de las instituciones para crear redes de poder e influencia resulta del convencimiento de que en un futuro cercano no es previsible el renacimiento de nuevos partidos políticos que recuperen su rol histórico para garantizar la necesaria estabilidad institucional que requieren todas las instituciones regionales en un proceso de profundización democrática, por ello esta sugerencia para crear redes institucionales que conduzcan a las sociedades regionales a un futuro más estable y sostenible, es en realidad un acto político que parte de la academia y pretende que se proyecte al conjunto de actores regionales.

Nuestros problemas sociales son muy complicados. Cochabamba no es en realidad un municipio plenamente democrático, aunque aparenta serlo. La mitad de los hogares no cuenta con vivienda en propiedad ni existen oportunidades para interrumpir y alterar esta tendencia que compromete a las generaciones futuras. Su vida cotidiana se basa en la ocupación de espacios públicos para aprovecharlos para generar ingresos de subsistencia. El distrito 9 que tiene 14.000 hectáreas está ocupado por inmigrantes que trabajan, estudian y viven en condiciones desastrosas, carentes de servicios básicos porque dos leyes nacionales partieron el municipio (Reserva forestal en el distrito 13 y zona agrícola para Misicuni en el distrito 9) más las añejas normas municipales impiden su planificación como municipio con grandes necesidades.

Los problemas de transporte, de comercio ferial que ocupa áreas verdes, ace-

ras y calles, la inseguridad ciudadana, la cantidad de discapacitados que buscan el sustento diario en las calles céntricas, los problemas de superposición de propietarios en un mismo lote, los juicios por herencias o trámites de subdivisión mal resueltos, la pobreza cultural que se manifiesta en las vías públicas, las inequidades en la distribución de los recursos departamentales, son argumentos suficientes para convocar a quienes tuvieron la suerte de poseer y usufructuar los medios de producción, a quienes recibieron formación profesional en las universidades y adquirieron y desarrollaron talentos que son actualmente desperdiciados en esta formación de redes institucionales.

Se debe convocar también a quienes no tuvieron acceso a formación profesional y se dedican a trabajos de comercio y servicios independientes y por supuesto a quienes trabajan en el transporte de pasajeros y de carga, son también propietarios de medios de producción y servicios organizados en asociaciones que tienen mucho que aportar y ofrecer en la planificación del territorio de la mancomunidad.

Creemos que las ideas transforman a las sociedades, pensamos que se necesita crear grupos ideológicamente sólidos y consistentes que proyecten ideas al futuro y que se empeñen en buscar los mecanismos para hacerlos políticamente viables y financiables. Creemos en que las redes institucionales que decidan actuar corporativamente pueden cubrir las deficiencias heredadas de nuestro pasado reciente, aprender las lecciones de las malas prácticas y superar los errores.

Creemos, por último, que la sociedad cochabambina necesita del concurso de todos sus agentes económicos, intelectuales y gremiales. Somos conscientes de que las mejores ideas aún no han sido pensadas y que éstas pueden lograrse al



interior del trabajo de las redes institucionales o al interior de grupos de pensadores. Somos también conscientes de que todos sabemos qué es lo que debemos hacer por Cochabamba y por su gente inmigrante, lo que aún no podemos diseñar son las estrategias para lograrlo, no

tenemos certeza cómo hacer realidad un proyecto regional de consenso para beneficio colectivo, y es por ello que confiamos en que un artículo como este sirva para iniciar el debate sobre cómo impulsar los cambios en la Cochabamba que tanto queremos.